SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2012

En La Lastrilla, a diez de julio de dos mil doce, siendo las doce horas, comparecen en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Concejales D.^a Ana Isabel Martín Benito, D. Enrique Gómez González, D. Benito Segovia Martín, D.^a María Carmen Horcajo Llorente, D. Juan José Velasco Cardiel, D. Raúl Zúñiga Manso, D. Pedro Luis Piñeiro Robledo, D.^a Carmen Meléndez de Pablos y D. Javier García Velasco. Excusa su no asistencia a la sesión D.^a María Teresa Arranz Olmos. El Sr. Velasco Cardiel, abandona el Pleno tras el punto segundo del orden del día. Presididos todos ellos por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación D. Vicente Calle Enebral y asistidos del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento, D. Antonio Bascuas Martín, al objeto de celebrar sesión ordinaria, con el siguiente orden del día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2012.- Con el voto a favor de todos los asistentes, se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 14 de mayo de 2012.

2º.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL PRESENTADA POR DON JUAN JOSÉ VELASCO CARDIEL.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL PRESENTADA POR DON JUAN JOSÉ VELASCO CARDIEL.- Se da lectura al escrito presentado con fecha 17 de mayo de 2012 por el Sr. Concejales del Grupo Popular, Don Juan José Velasco Cardiel, mediante el que presenta su renuncia al cargo de Concejales de este Ayuntamiento.

Visto lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 5 de junio, sobre Régimen Electoral General e Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, la Comisión con el voto a favor de los cuatro miembros del Grupo Popular y la abstención de los dos miembros del Grupo Socialista, aprueba el siguiente dictamen como propuesta de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento:

Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia a su cargo de Concejales de este Ayuntamiento presentada por Don Juan José Velasco Cardiel, Concejales perteneciente al Grupo Popular.

Segundo.- Declarar la vacante de un puesto de Concejales perteneciente al Grupo Popular.

Tercero.- Solicitar a la Junta Electoral Central que sea expedida la credencial acreditativa de la condición de electa, a favor de Doña Joanna Osiecka, por ser la candidata a la que corresponde cubrir la vacante, por ser la siguiente en la lista del Partido Popular.”

VOTACIÓN.- A continuación el Pleno, con el voto a favor de los siete miembros del Grupo Popular y la abstención de los tres miembros asistentes del Grupo Socialista, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

3º.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA MANCOMUNIDAD “LA ATALAYA”.- Por la

Presidencia se informa a los corporativos del acuerdo de la Asamblea de Concejales, adoptado el día 6 de junio de 2012, por el que se insta a la Noble Junta de Cabezuelas a que acceda al cambio de titularidad a favor de la Mancomunidad de parte de su concesión del río Cambrones. También informa sobre la reunión mantenida la semana pasada con la Noble Junta de Cabezuelas que quedaron en consultar con los demás miembros de la Noble Junta. En cuanto al consumo de agua del río Cambrones por parte de la Mancomunidad se ha cuantificado en su primer trimestre en 36,6 l/s.

4º.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 54/2012, DE 29 DE MAYO DE 2012, SOBRE PERSONACIÓN EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA DE ASISTENCIA JURÍDICA EN EL MISMO.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Contratación, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 54/2012, DE 29 DE MAYO DE 2012, SOBRE PERSONACIÓN EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA DE ASISTENCIA JURÍDICA EN EL MISMO.- A la vista de la interposición de recurso contencioso-administrativo por Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A. contra la desestimación del recurso de reposición interpuesta por ésta, contra acuerdo plenario de 7 de noviembre de 2011, por el que se desestima la petición de Aqualia, S.A. de una subvención de 37.276,53 euros, por el déficit de explotación en la concesión del servicio de abastecimiento de los años 2010 y 2011, por esta Alcaldía, por razones de urgencia, se dictó decreto nº 54/2012, con fecha 29 de mayo de 2012.

A continuación la Comisión de Urbanismo y Contratación, por unanimidad aprueba el siguiente dictamen como propuesta de acuerdo al Pleno Municipal:

Primero.- Ratificar en todos sus términos el decreto de la Alcaldía nº 54/2012, sobre personación de este Ayuntamiento en el referido recurso contencioso-administrativo y solicitud a la Diputación Provincial de Segovia de la defensa jurídica en este asunto.”

VOTACIÓN.- Tras la intervención que se expresará, el Pleno, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

INTERVENCIÓN:

- de Don Pedro Luis Piñeiro Robledo. Manifiesta en su intervención que tras leerse el Pliego de Condiciones de la Concesión ha detectado doce incumplimientos por parte de la Concesionaria. Por ello considera oportuno que se mantenga una reunión con AQUALIA, en la que se le pongan de manifiesto dichos incumplimientos y se les de un plazo para su subsanación y si no cumplen, adoptar las medidas oportunas, pudiendo llegar, en su caso, al rescate de la concesión por parte de este Ayuntamiento.

5º.- RENOVACIÓN DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE LA LASTRILLA.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE RENOVACIÓN DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE LA LASTRILLA.-

Siendo necesario proceder a la renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio, y a la vista de la única solicitud, presentada por D. José María Ferrero de Pablo, para ocupar el puesto de Juez de Paz Sustituto de esta localidad, la Comisión Informativa de Cuentas aprueba el siguiente dictamen como propuesta de acuerdo para el Pleno Municipal:

Primero.- Elegir como Juez de Paz Sustituto de La Lastrilla a D. José María Ferrero de Pablo, con D.N.I. nº 3.393.315-X, nacido en Estebanvela-Ayllón, provincia de Segovia, el día 27 de febrero de 1.945, hijo de Juan Manuel y de Ascensión, residente en esta localidad en Calle Cerro de la Fuente nº 36, de profesión pensionista, y que no pertenece o trabaja en ningún partido político o sindicato. No concurriendo en esta persona ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 de la L.O.P.J.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado, así como al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.”

VOTACIÓN.- No produciéndose intervención alguna y sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

6º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, en sesión celebrada el día 10 de mayo, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011.- La Comisión, a la vista del expediente de la Cuenta General de 2011, y con el voto a favor de los cinco miembros del Grupo Popular y la abstención de los dos miembros del Grupo Socialista, acuerda:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General de esta entidad, correspondiente al ejercicio de 2011, en los propios términos en que aparece rendida y cuyo resumen es el siguiente:

1.- CUENTA DE RESULTADOS:

A) RESULTADO DEL EJERCICIO : 498.136,70 €

2.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE:

A) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.917.439,79 €
B) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.673.861,80 €
C) RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	243.577,99 €
D) G.F. CON REMANENTE LIQUIDO TESORERIA	0,00 €
F) DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN POSITIVA.....	0,00 €
G) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.....	243.577,99 €
H) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.....	871.307,05 €
I) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	244.517,57 €
J) FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA.....	95.683,28 €
k) SALDOS DE DUDOSO COBRO:.....	60.159,16 €
K) REMANENTE DE TESORERÍA PARA G.G.....	215.647,76 €

Segundo.- Que el expediente de la Cuenta General se exponga al público, en unión de sus justificantes y

de este dictamen, por el plazo de quince días, previa publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero.- Que de no producirse alegaciones durante el periodo de exposición pública, se eleve este dictamen, sin necesidad de adoptar otro nuevo, y como propuesta de acuerdo de aprobación de la referida Cuenta General al Pleno Municipal, incorporando a la Cuenta 100 "Patrimonio" mediante el correspondiente asiento en la Contabilidad General, el resultado del ejercicio, dando traslado de este acuerdo, junto con el expediente, al Consejo de Cuentas de Castilla y León."

VOTACIÓN.- A continuación, el Pleno, teniendo en cuenta que no se ha presentado alegación o reclamación alguna durante el periodo de exposición pública, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

7º.- ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL SITA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "LOS ESCOBARES" MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Contratación, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

"DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL SITA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "LOS ESCOBARES" MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.- Del expediente tramitado para la contratación de la explotación del bar de la piscina municipal sita en el complejo deportivo "Los Escobares", se desprenden los siguientes antecedentes:

1º.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2012 acordó convocar la oportuna licitación para la contratación de la explotación del bar de la piscina municipal, mediante procedimiento negociado sin publicidad y con un único criterio de adjudicación que es el de la oferta económica más ventajosa.

2º.- Previa invitación a cuatro empresas, sólo se presentó una oferta, correspondiente a D^a Cristina de la Cruz Martín, por un importe de 4.850 euros más el I.V.A. correspondiente.

3º.- Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2012, se determinó que la oferta económica más ventajosa para la adjudicación del contrato es la presentada por D^a Cristina de la Cruz Martín, al reunir todos los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones, no siendo necesario determinar la clasificación al ser la única oferta presentada.

4º.- Requerida D^a Cristina de la Cruz Martín para la presentación de la documentación a que hace referencia el artículo 151.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la misma se presentó la oportuna documentación, salvo el certificado de la Agencia Tributaria, del cual ha presentado su solicitud, con fecha 25 de junio de 2012, incluida la garantía, por importe de 242,50 euros.

Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Urbanismo y Contratación por unanimidad aprueba el siguiente dictamen, como propuesta de acuerdo para el Pleno Municipal:

Primero.- Declarar válido el acto licitatorio celebrado y, en su consecuencia, adjudicar el contrato de la

explotación del bar de la piscina municipal sita en el complejo deportivo “Los Escobares” a D^a Cristina de la Cruz Martín, por importe de 4.850 euros anuales, más el I.V.A. correspondiente.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y requerirle para la firma del correspondiente contrato, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, a tal efecto deberá presentar, previamente a la firma del mismo, el certificado de la Agencia Tributaria.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don Vicente Calle Enebral, o persona que legalmente le sustituya, para la firma del oportuno contrato.”

VOTACIÓN.- No produciéndose intervención alguna y sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

8º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ONCE DE JULIO”, PISTAS DE TENIS, FRONTÓN Y CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO “LOS ESCOBARES”.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Contratación, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ONCE DE JULIO”, PISTAS DE TENIS, FRONTÓN Y CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO “LOS ESCOBARES”.- Del expediente tramitado para la contratación, mediante concesión administrativa, del servicio público de gestión del Pabellón Polideportivo Municipal “Once de Julio”, pistas de tenis, frontón y campo de fútbol del Complejo Deportivo “Los Escobares”, se desprenden los siguientes antecedentes:

1º.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2012 acordó convocar la oportuna licitación para la contratación, mediante concesión administrativa, del servicio público de gestión del Pabellón Polideportivo Municipal “Once de Julio”, pistas de tenis, frontón y campo de fútbol del Complejo Deportivo “Los Escobares”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

2º.- Durante el período de admisión de proposiciones, se presentaron dos ofertas, una de DUNA INGENIERÍA Y ÁREAS VERDES S.L. y otra de SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.

3º.- Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2012 se acordó rechazar la proposición presentada por DUNA INGENIERÍA Y ÁREAS VERDES, S.L. dado que no se presenta la garantía provisional exigida en el pliego de condiciones, por importe de 1.500 euros. Además, la documentación acreditando la solvencia económica son meras fotocopias sin compulsar de certificados bancarios del año 2011. En lo relativo a la solvencia profesional, se aporta un certificado de una sociedad con la que mantiene contrato privado para explotación y mantenimiento de pistas de tenis, pádel y campos de fútbol, pero no de la entidad pública correspondiente. Tampoco se acredita haber organizado o arbitrado ligas o torneos deportivos de temporada con duración superior a seis meses para un mínimo de dos administraciones públicas distintas.

Asimismo, por el Pleno Municipal se determinó que la oferta económica más ventajosa para la adjudicación del contrato administrativo es la presentada por SIMA DEPORTE Y OCIO S.L., al reunir todos los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones y en base a las siguientes puntuaciones:

Nº	EMPRESA	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN SOBRE B
1	SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.		
	Mejoras técnicas u organizativas	28.161,00 €	5 PUNTOS
	Mejoras o ampliaciones de infraestructuras	71.350,00 €	15 PUNTOS
	TOTAL	99.511,00 €	20 PUNTOS

Nº	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	PUNTUACIÓN SOBRE C
1	SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.	45.572,98 €	80 PUNTOS

Nº	EMPRESA	PUNTACIÓN SOBRE B	PUNTACIÓN SOBRE C	TOTAL
1	SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.	20	80	100

4º.- Requerida la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. para la presentación de la documentación a que hace referencia el artículo 151.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la misma se presentó dicha documentación, incluida la garantía definitiva, mediante aval bancario, por importe de 2.278,65 euros.

Por lo expuesto, esta Comisión, con el voto a favor de los cuatro miembros del Grupo Popular y el voto en contra de los dos miembros del Grupo Socialista, aprueba el siguiente dictamen, como propuesta de acuerdo para el Pleno Municipal:

Primero.- Declarar válido el acto licitatorio celebrado, rechazando la proposición presentada por DUNA INGENIERÍA Y ÁREAS VERDES, S.L. por los motivos señalados en el antecedente nº 3.

Segundo.- Adjudicar el contrato, mediante concesión administrativa, del servicio público de gestión del Pabellón Polideportivo Municipal “Once de Julio”, pistas de tenis, frontón y campo de fútbol del Complejo Deportivo “Los Escobares” a SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. por ser la oferta económica más ventajosa, en los términos previstos en los Pliegos de Condiciones y las mejoras contempladas en la oferta de la adjudicataria y recibiendo la misma una contraprestación económica anual de 45.572,98 euros más el IVA correspondiente.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y requerirle para la firma del correspondiente contrato, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, previo pago del importe de los anuncios de licitación.

Cuarto.- Notificar, asimismo, el presente acuerdo a los demás licitadores, con expresión de los recursos que contra el mismo procedan, en cumplimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y hacer pública esta adjudicación en la página web de este Ayuntamiento www.lalastrilla.com (perfil de contratante).

Quinto.- A tenor de lo establecido en el artículo 103.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, proceder a la devolución de la garantía provisional presentada.

Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don Vicente Calle Enebral, o persona que legalmente le sustituya, para la firma del oportuno contrato.”

VOTACIÓN.- A continuación, el Pleno, con el voto a favor de los seis miembros del Grupo Popular y el voto en contra de los tres miembros del Grupo Socialista, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

9º.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO.- La Comisión Especial de Cuentas, tiene conocimiento del expediente tramitado al efecto, del cual resultan los siguientes

ANTECEDENTES:

Primero.- Con fecha 21 de febrero de 2012, AQUALIA, S.A. presenta un Estudio Justificativo con nueva propuesta de Tarifas de agua para el ejercicio 2012.

Segundo.- Por el Ingeniero Don Juan Manuel Benito Herrero, se emite un informe sobre dicha propuesta, en los términos en el que aparece redactado en el expediente, constando sus conclusiones en el acuerdo de aprobación provisional de las tarifas, adoptado por el Pleno el día 5 de marzo de 2012.

Tercero.- Expuesto el expediente al público, por plazo de treinta días, a través de anuncios en el BOP de Segovia de 12 de marzo (Núm. 31) y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se han presentado 114 alegaciones en las que se muestra la disconformidad con dicha subida del 26% que es desproporcionado, ya que si Aqualia llegara al 80% del rendimiento de la red, se mantendría el equilibrio financiero de la concesionaria.

Cuarto.- Ante la formulación de estas alegaciones, se solicitó informe al Abogado-Asesor Fiscal, Don Víctor Martín Fernández, cuyo informe también consta en el expediente y en el que se concluye que las tarifas en vigor cubren los costes del servicio, por lo que no procede la subida de las mismas. En dicho informe aparece un hecho relevante, cuál es la indebida repercusión, que hace la concesionaria, del canon pagado al Ayuntamiento como coste del servicio.

Quinto.- En la Comisión Informativa de Cuentas, celebrada el día 10 de mayo de 2012, se acordó dejar pendiente el asunto de la resolución de las alegaciones presentadas ante los aspectos nuevos recogidos

en el informe del Sr. Martín Fernández y requerir un nuevo informe a un letrado especialista en estas cuestiones.

Sexto.- Solicitado dicho informe al Bufete de Codina&Asociados, se ha emitido por dichos letrados el siguiente informe:

«Asesoría Jurídica 4/07/2012

Ref: Solicitud de revisión de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de La Lastrilla para el año 2012.

Por el Excmo. Ayuntamiento de La Lastrilla se solicita, de este despacho profesional, informe jurídico sobre la solicitud de revisión para el año 2012 de las tarifas por el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio formulada por la concesionaria, AQUALIA, S.A., y, en particular, sobre los siguientes extremos:

- a) Existencia o no del desequilibrio económico alegado por la concesionaria.*
- b) Articulación del principio de riesgo y ventura del empresario, en lo que se refiere a este asunto.*
- c) Consideración del canon pagado por la adjudicataria como coste del servicio a repercutir en las tarifas.*
- d) En definitiva, procedencia o no de la revisión de tarifas.*

Para cumplir dicho encargo, se me facilita la siguiente documentación:

Documento 1.- Solicitud de Revisión de Tarifas por Aqualia. S.A. junto con Estudio Justificativo.

Documento 2.- Informe emitido por el Ingeniero Don Juan Manuel Benito Herrero (Inserma Ingenieros S.L.) a instancias del Ayuntamiento de La Lastrilla.

Documento 3.- Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de La Lastrilla, aprobando de forma provisional la Revisión de las Tarifas para el servicio de municipal de abastecimiento de agua potable para el año 2012.

Documento 4.- Anuncio en el B.O.P. de Segovia de dicho acuerdo.

Documento 5.-Alegación presentada por Doña Cristina Segovia Marinas a la aprobación inicial de la Revisión de tarifas.

Documento 6.- Informe emitido por el Letrado Don Víctor Martín Fernández, sobre la revisión de las Tarifas, a instancias del Ayuntamiento de La Lastrilla.

Anexo Núm. 1.- Pliego de Cláusulas Económico- Administrativas y Técnicas por las que se rigió la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de La Lastrilla.

Anexo Núm. 2.- Informe emitido por el Ingeniero Don Juan Manuel Benito Herrero sobre las ofertas presentadas.

Anexo Núm. 3.- Acta de apertura de proposiciones de la Mesa de Contratación.

Anexo Núm. 4.- Acuerdo de Adjudicación del Concurso a la entidad mercantil AQUALIA, S.A.

Anexo Núm. 5.- Contrato de Concesión de la Gestión del Servicio.

Anexo Núm. 6.- Estudio Económico del Servicio durante la concesión incluido en la oferta de AQUALIA, S.A.

Anexo Núm. 7.- Oferta Económica formulada por AQUALIA, S.A.

Anexo Núm. 8.- Facturas giradas por la Mancomunidad de la Atalaya por el suministro de agua al municipio de La Lastrilla desde de la Atalaya desde el año 2008 hasta el primer trimestre de 2012, que luego son abonadas por AQUALIA, S.A.

Anexo Núm. 9.- Demanda interpuesta por AQUALIA, S.A. ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Segovia frente al Acuerdo adoptado en fecha 5 de marzo de 2012 por el Pleno del Ayuntamiento de La Lastrilla, por el que se desestima el recurso de reposición deducido frente al anterior Acuerdo Plenario de 7 de noviembre de 2011.

Anexo Núm. 10.- Cuadro con la facturación realizada por AQUALIA, S.A. a los usuarios del servicio, así como de las cantidades facturadas por la Mancomunidad de La Atalaya al concesionario durante el mismo periodo.

Aceptando gustoso el requerimiento, se emite el siguiente

INFORME

I.- NORMATIVA APLICABLE.

Dado que se trata de la gestión indirecta de un servicio público de titularidad municipal otorgada mediante concesión, la prestación del servicio se rige, en primer lugar, por las previsiones contenidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas por las que se rigió su adjudicación, así como en el contrato formalizado al efecto; por las normas contenidas en los arts. 114 a 137 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955, en adelante RSCL), y finalmente, por los arts. 154 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en adelante, TRLCAP), que resulta de aplicación al presente caso por motivos temporales, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que reproduce el contenido de la Disposición Transitoria Primera de la anterior Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

II.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CANON CONCESIONAL.

Por razones sistemáticas, conviene abordar en primer término la cuestión de la naturaleza jurídica del canon previsto en la cláusula cuarta del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares por el que se rigió la adjudicación de la concesión, y ofertado en su día por AQUALIA, S.A., dado que, como veremos más adelante, este extremo resulta de capital importancia a la hora de determinar si existe o no desequilibrio en la concesión.

Pues bien, la citada cláusula cuarta establece, al amparo de lo previsto en el art. 115.8º del RSCL, lo siguiente:

“4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: CANON.

Se valorará preferentemente la oferta de un canon teniendo en cuenta el total de la facturación actual y el total de los años de adjudicación, ingresándose por adelantado al Ayuntamiento en el plazo de dos meses después de la firma del contrato. No obstante también se admitirán ofertas económicas en las que no sólo no se ofrezca un canon a pagar sino que se fije una subvención a obtener del Ayuntamiento.

Como forma de pago, para el supuesto de pago de canon, se establece el siguiente: El canon anual en el primer mes natural de cada año. En caso de pago de subvención se pagará también en el primer mes natural de cada año”.

A la vista de la oferta económica formulada en su día por AQUALIA, S.A. en el procedimiento de adjudicación de la concesión, del cuadro de explotación del servicio durante el periodo de concesión, y de la solicitud de revisión de las tarifas del servicio para el año 2012 formulada por dicha empresa el 21 de febrero del año en curso, es claro que la concesionaria reputa el canon que ofertó en su día (360.000€) como un coste de explotación del servicio, puesto que en todos los documentos citados se incluye, junto a la partida correspondiente a la amortización de las inversiones realizadas por la concesionaria para la prestación del servicio, una partida por importe de 30.730€ en concepto de “amortización del canon”, como si fuera una inversión mas.

Pues bien, conviene señalar, ya de entrada, que dicha interpretación no encuentra acogida ni en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, ni en el Pliego de Condiciones Técnicas, puesto que en ningún precepto de los mismos se establece que el canon pueda incluirse entre los costes derivados de la prestación del servicio.

Pero es que, además, este Letrado considera que el planteamiento de la concesionaria es incorrecto, puesto que desvirtúa por completo la naturaleza jurídica del canon concesional.

Y es que, en efecto, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 3 de mayo de 2001, 30 de noviembre de 2001 y 20 de abril de 2004, ha definido el canon previsto en el art. 115.8º del RSCL como “la participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación, lo que implica que tarifa y canon responden a una finalidad distinta y que aquella constituye la contraprestación en favor del concesionario y a cargo del público usuario, y que el canon es la suma que el concesionario ha de abonar a la Administración precisamente por razón de la concesión”.

O dicho sea en otros términos: El canon constituye un “precio” que la Administración concedente puede establecer potestativamente, y que el concesionario ha de satisfacer por el hecho de serlo.

Es un elemento, por tanto, que debe tenerse en cuenta en el análisis económico de ingresos y beneficios que todo licitador debe realizar a la hora de licitar para la adjudicación de la gestión de un servicio público, puesto que incide directamente sobre el hipotético beneficio a obtener, pero en ningún caso puede reputarse como un coste de prestación del servicio, ya que en ese caso perdería su naturaleza de contraprestación, puesto que el concesionario estaría recuperando las cantidades pagadas en este concepto detrayendo su importe de los ingresos obtenidos de los usuarios del servicio.

En el presente caso, y a la vista de la oferta realizada en su día por AQUALIA, S.A., al incluirse el canon entre los costes de amortización de las inversiones realizadas para la prestación del servicio, se ha convertido, de hecho, en una suerte de “préstamo” realizado al Ayuntamiento cuyo importe debe ser reintegrado a la concesionaria, incrementado incluso con intereses, en tantos plazos o cuotas como años de concesión se prevén.

Este planteamiento resulta, como ya hemos señalado, completamente inadmisibile, por resultar radicalmente opuesto a la naturaleza jurídica del canon concesional, que en ningún caso puede considerarse como un coste del servicio.

III.- SOBRE LA EXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN EL SERVICIO PRESTADO POR AQUALIA, S.A. QUE EXCEDA DEL PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

Dado que nos hallamos ante la gestión indirecta de un servicio público, su prestación se encuentra sometida al principio de riesgo y ventura, tal y como establecía, con carácter general, el art. 98 del TRLCAP y, en el caso particular del servicio de alcantarillado y abastecimiento de agua potable del municipio de La Lastrilla, se indicaba expresamente en el párrafo primero del apartado primero de la cláusula vigésimo segunda del Pliego por el que se rigió su adjudicación.

Principio éste que, según opinión unánime de la jurisprudencia y de la doctrina científica, implica que el contratista debe asumir todos aquellos costes de prestación del servicio que el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares determine, sin que pueda considerarse que exista una especie de seguro a cargo de la Administración que le cubra de todos los riesgos de su actividad, pues la actividad empresarial es por esencia imprevisible, y del mismo modo que la marcha de los acontecimientos puede determinar ganancias para el empresario, esta misma marcha puede hacer que sufra pérdidas y no por ello tales pérdidas ha de compartirlas siempre y en todo caso la otra parte contratante, pues el que arriesga su dinero en un negocio asume como premisa que determinadas actividades son de suyo una apuesta en la que se puede ganar o perder.

Ahora bien, en el caso de la prestación indirecta de servicios cuya titularidad corresponde a las entidades locales, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del art. 127.2 del RSCL, dicho principio general cede en dos supuestos, imponiendo a la Administración contratante la obligación de reestablecer el equilibrio económico de la concesión cuando éste se haya visto alterado bien por razón de las modificaciones que la propia Administración haya introducido en el servicio y que incrementen los costos o disminuyan la retribución obtenida (el denominado *ius variandi*), bien cuando aun sin mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión (o *factum principis*).

En el primer caso, se procederá a la compensación económica del perjuicio ocasionado al concesionario y, en el segundo, se procederá a la revisión de las tarifas y, en su caso, de la subvención, conforme a lo establecido en el antecitado precepto y en el apartado segundo del art. 128.3 de la misma Disposición reglamentaria, así como en el propio Pliego por el que se rigió la adjudicación (subapartados tercero y cuarto del apartado segundo de la cláusula decimonovena, y subapartado b) del apartado segundo de la cláusula vigésimoprimera.

No obstante, conviene señalar también que en el supuesto del *factum principis*, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo viene exigiendo de forma constante que, para apreciar su concurrencia, **la ruptura del equilibrio financiero del contrato tiene que deberse a circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas que afecten grandemente a éste, de tal forma que se ponga en riesgo la propia prestación del servicio** (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril del 2001 -recurso núm. 8602/1995-; 20 de mayo de 1999 -recurso núm. 4547/1993- y de 30 de abril de 1999 -recurso núm. 7196/1992-).

En el presente caso, y según se desprende tanto de la solicitud de revisión de tarifas para el año 2012 formulada por AQUALIA, S.A., como de la demanda presentada por dicha empresa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Segovia, la concesionaria considera que a partir del segundo trimestre del año 2010 se habría producido un desequilibrio económico en la prestación del servicio que se imputa, única y exclusivamente, al importante incremento del precio del agua adquirida a la Mancomunidad de La Atalaya a partir de dicho momento.

Circunstancia ésta que se califica como “imprevista” e “imprevisible” y que, a su juicio, obligaría por tanto al incremento de las tarifas en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 127.2.b) del RSCL y en el propio Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares, puesto que con las tarifas actualmente vigentes se obtendrían unos ingresos estimados de 167.701,64 € para el año 2012, mientras que los costes de prestación del servicio para el mismo periodo ascenderían a 202.289,60 €.

Pues bien, debe partirse del hecho incuestionable, puesto que así resulta de la documentación facilitada a este Letrado y le ha sido confirmado por los propios Servicios Municipales, que, efectivamente, el precio de compra del agua a la Mancomunidad de la Atalaya se ha incrementado en los términos expuestos por AQUALIA, S.A..

No obstante, aun dando por buena la tesis de la concesionaria de que dicha circunstancia resultase imprevista, imprevisible, y ajena por completa a su esfera de control (con las reservas que se formularán mas adelante), lo cierto es que ello no genera un desequilibrio económico en la concesión que justifique la aplicación del mecanismo de revisión previsto en el apartado b) del art. 127.2 del RSCL.

Y es que, en efecto, y según se desprende de la solicitud de revisión formulada por AQUALIA, S.A., la concesionaria ha incluido indebidamente -tal y como se razona en el apartado antecedente del presente informe- el coste de amortización del canon concesional entre los costes previstos por la prestación del servicio, por lo que en base a las estimaciones realizadas por la propia concesionaria, detrayendo dicha cantidad, más la parte proporcional de los gastos generales y beneficio industrial, resulta que los ingresos estimados con las tarifas vigentes resultarían suficientes para cubrir el coste de prestación del servicio.

Es más; aunque no se dispone de datos sobre los costes de prestación del servicio en años anteriores, podemos asumir, a la vista del cuadro de explotación del servicio durante el periodo de concesión incluido con la oferta de AQUALIA, S.A., que la concesionaria ha venido incluyendo el coste de amortización del canon entre aquéllos en los años precedentes, también de forma indebida.

Ello quiere decir que, con toda probabilidad, en dichos años se ha venido sobreestimando el coste de prestación del servicio en una cantidad anual de 30.730 € (coste de amortización del canon), generando un “superavit” para la concesionaria en claro perjuicio del municipio.

Por tanto, no sólo no debería accederse a la revisión de tarifas solicitada por AQUALIA, S.A. para el año 2012, sino que tampoco debería accederse a ningún incremento futuro en las mismas hasta tanto en cuando no sea compensado ese desequilibrio en la concesión que se ha venido produciendo, a favor de la concesionaria, desde su propio inicio.

Y todo ello sin perjuicio de que el incremento en el precio de adquisición del agua a la Mancomunidad de la Atalaya deba reputarse como una circunstancia sobrevenida, imprevista e imprevisible, como alega AQUALIA, S.A., o como una consecuencia del pobre rendimiento de la red municipal de abastecimiento de agua, como apuntan los diversos informes elaborados por el Ingeniero de Caminos Juan Manuel Benito Herrero, lo cual sería directamente imputable a la concesionaria (puesto que en su oferta se comprometió a obtener un rendimiento de la red muy superior al existente a día de hoy), ya que en este caso no sólo no debería accederse al incremento de tarifas solicitado, sino que, incluso, procedería la imposición a la concesionaria de las sanciones previstas en el Pliego y, posiblemente, el estudio de la concurrencia de causa suficiente para proceder a la resolución de la concesión.

No obstante, ello sólo podrá determinarse tras una investigación detallada por parte de los servicios municipales, puesto que en la actualidad no existen datos suficientes (o por lo menos no le han sido facilitados al Letrado que suscribe), que permitan alcanzar una conclusión en un sentido o en otro sobre este extremo, como así reconoce el Ingeniero D. Juan Manuel Benito Herrero en sus informes.

IV.- A MODO DE CONCLUSIÓN.

Solicitada mi opinión de derecho sobre la solicitud de revisión para el año 2012 de las tarifas por el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de La Lastrilla formulada por la concesionaria, AQUALIA, S.A., el Letrado que suscribe considera que ésta debe denegarse al no darse el presupuesto previsto en el art. 127.2.b del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, puesto que el incremento en el precio de la adquisición del agua a la Mancomunidad de la Atalaya se ve compensado por la detracción del coste de amortización del canon ofertado en su día por AQUALIA, S.A., indebidamente incluido por dicha mercantil entre los costes directos generados por la prestación del servicio, de tal forma que las tarifas actualmente vigentes resultan suficientes para cubrir éstos.

Y ello sin perjuicio de lo que una investigación más detallada por parte de ese Ayuntamiento pueda revelar acerca del verdadero rendimiento de la red municipal de abastecimiento de agua -y, por tanto, de su gestión por AQUALIA, S.A.- y su posible incidencia sobre el citado precio de adquisición del agua.

Es cuanto tengo el honor de informar a ese Excmo. Ayuntamiento, quien no obstante resolverá.»

En virtud de todo ello, la Comisión Especial de Cuentas, por unanimidad aprueba el siguiente dictamen, como propuesta de acuerdo al Pleno Municipal.

Primero.- A tenor de los informes relatados y en especial al emitido por el Letrado Sr. Codina Vallverdú, estimar las alegaciones presentadas y dejar sin efecto alguno el acuerdo de aprobación provisional de las tarifas de fecha 5 de marzo de 2012.

Segundo.- En base a los razonamientos expuestos en el reiterado informe jurídico del Sr. Codina, mantener las tarifas en vigor, por la tasa de abastecimiento de agua potable, a fecha 1 de enero de 2012, sin que las mismas experimenten subida alguna en este ejercicio, rechazando, en su consecuencia la subida instada por la concesionaria.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados –alegantes y concesionaria- con expresión de los recursos que contra el mismo procedan.”

VOTACIÓN.- A continuación el Pleno, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

10º.- ACTUACIONES A SEGUIR EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO DE BERNUY DE PORREROS DE 15 DE MAYO DE 2012, SOBRE NO CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE ACTUACIONES A SEGUIR EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO DE BERNUY DE PORREROS DE 15 DE MAYO DE 2012, SOBRE NO CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS.- La Comisión Especial de Cuentas, conoce del escrito del Ayuntamiento de Bernuy de Porreros, por el que se da traslado a este Ayuntamiento, del acuerdo plenario adoptado con fecha 15 de mayo de 2012, en relación con el aprovechamiento conjunto con La Lastrilla del agua.

El apartado dispositivo único de dicho acuerdo, decide “No constituir comunidad de usuarios para aprovechamiento de recursos hídricos con el Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia)”.

Entendiendo que este acuerdo resulta perjudicial para los intereses del Ayuntamiento de La Lastrilla y sus vecinos y teniendo en cuenta que durante más de 30 años se ha venido haciendo un uso común del sondeo y se ha contribuido en debida forma a los gastos generados, esta Comisión por unanimidad aprueba el siguiente dictamen como propuesta de acuerdo al Pleno Municipal:

1º.- Recurrir en reposición el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Bernuy de Porreros, de 15 de mayo de 2012, mediante el que se acuerda “no constituir comunidad de usuarios para aprovechamiento de recursos hídricos con el Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia).

2º.- Facultar al Sr. Alcalde o persona que legalmente le represente, para la firma del oportuno recurso de reposición y su debida fundamentación.

3º.- Sin perjuicio de todo ello, iniciar las conversaciones oportunas con el Ayuntamiento de Bernuy de Porreros, a fin de tratar de llegar a una solución satisfactoria para ambas entidades, a través de la firma del oportuno convenio o figura similar.”

VOTACIÓN.- A continuación y sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

11º.- ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA LISTA PROVISIONAL DE POSIBLES ADQUIRENTES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.- El Pleno conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de julio, del siguiente tenor:

“DICTAMEN SOBRE PROPUESTA DE ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA LISTA PROVISIONAL DE POSIBLES ADQUIRENTES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.- Una vez transcurrido el plazo de presentación de alegaciones a la lista provisional de posibles adjudicatarios, elaborada por esta misma Comisión el pasado día 10 de mayo de 2012, tras la debida exposición pública a través de anuncio en el BOP de Segovia, página www del Ayuntamiento de La Lastrilla y notificaciones a los propios interesados, y no habiéndose presentado alegación alguna. A continuación la Comisión Conjunta de Cultura y Urbanismo, aprueba el siguiente dictamen como propuesta de acuerdo para el Pleno Municipal:

Primero.- Elevar a definitiva la Lista Provisional de admitidos y excluidos elaborada por la Comisión conjunta de Urbanismo y Cultura, que a continuación se expresa:

ADMITIDOS:

1.Barroso Cano, Laura. DNI nº 70254427F

EXCLUIDOS:

A) Por no cumplir requisito de empadronamiento:

1. Vegas García, Mario. DNI nº 70246077Y.
2. Del Río Martín, Patricia. DNI nº 70238956S.

B) Por no acreditación de ingresos suficientes:

1. De Frutos Herrero, Cristina. DNI nº 70256669H.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y página www. de este Ayuntamiento la citada lista.

Tercero.- No siendo necesario celebrar el sorteo contemplado en las bases, remitir a la entidad INMOBILIARA CONSTRUCTORA GÓMEZ Y GÓMEZ, S.A. el nombre de la adjudicataria de la vivienda, Dª Laura Barroso Cano, a los efectos de que se proceda a la formalización del contrato de compraventa.

Cuarto.- Dar tras traslado de este acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos que contra el mismo procedan.”

VOTACIÓN.- No produciéndose intervención alguna y sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba en todos sus términos el dictamen emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

Antes del turno de ruegos y preguntas y habiéndose presentado por escrito con anterioridad al Pleno tres Mociones del Grupo Socialista, la Corporación procede a su estudio y deliberación.

MOCIÓN 1ª:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más del 90% de los municipios españoles son pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes, ocupan más del 80% del territorio y sólo concentran cerca del 32% de la población española. Son, por tanto, municipios rurales. El intenso desarrollo económico de nuestro país de las últimas décadas se ha concentrado, como siempre, en el medio urbano español y, sobre todo, en las grandes ciudades y en mucha menor medida en el medio rural donde se asientan la gran mayoría de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los **Planes Provinciales de Obras y Servicios** gestionados por las Diputaciones, con la participación activa de los Ayuntamientos de su ámbito territorial, han venido siendo una de las herramientas financieras más potente, eficaz y eficiente con que han venido contando los pequeños municipios para su desarrollo socioeconómico y mantenimiento, así como para el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la preservación medioambiental del conjunto del territorio español.

Por este motivo, la eliminación que se vislumbra de la aportación del Estado a estos Planes Provinciales no sólo es relevante sino que supone un **verdadero “atentado” a la cohesión territorial y social** de este país ya que, por enésima vez se **lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas del medio rural español** que viven en pequeños municipios que, hoy por hoy, todavía padecen un mayor grado de atraso relativo sea cual sea su localización geográfica en el Estado.

Abundando en ello, podemos afirmar que:

En el ámbito local resulta complicado y casi siempre erróneo homogeneizar la gestión de todas las entidades locales dadas las desigualdades que, de partida, se dan entre grandes y pequeños municipios, medio urbano y medio rural. Por ello, efectivamente, algunos que cuentan con formidables presupuestos cuentan también hoy con formidables déficit mientras la mayoría, con presupuestos más modestos consiguen mantener unos servicios básicos dignos y necesarios que han servido y sirven para paralizar la **“sangría poblacional”** que históricamente se venía produciendo en nuestro país desde las zonas rurales a las urbanas. La eliminación de la aportación del Estado a los Planes Provinciales sólo provocará sin margen de error alguno que la brecha que aún existe entre lo urbano y lo rural se profundice hasta límites inimaginables en el siglo XXI, llevándonos de nuevo sin remedio hacia un nuevo éxodo rural que ya se había superado en muchos territorios del Estado Español.

Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en este país son idénticos, vivan éstos donde vivan, pertenezcan al medio rural o urbano, residan en pequeños municipios o en grandes ciudades. Siendo así las cosas resulta evidente que para que puedan ejercerse esos derechos ciudadanos, éstos han de tener la

posibilidad de ejercitarlos en el medio en el que viven y que en el ámbito de los pequeños municipios sólo es esto posible si cuentan con las infraestructuras y los servicios básicos que la puesta en marcha de los Planes Provinciales posibilitan. La supresión del apoyo del Estado a estos Planes sólo conseguirá **incrementar de nuevo las desigualdades sociales y lesionar los derechos básicos constitucionales de los ciudadanos del medio rural**, ya de por sí lesionados por otras medidas desplegadas por el Estado que les están afectando directamente como son los recortes en materia de sanidad, dependencia, educación, formación y orientación laboral y un largo etcétera que se une igualmente a la eliminación casi total de la inversión Estatal a la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Del mismo modo, esta desproporcionada disminución presupuestaria de los Planes Provinciales está incidiendo ya **negativamente en el desarrollo económico de los pueblos y en la paralización de la generación de empleo**, abocándolos irremediabilmente de nuevo al subdesarrollo económico y social. Resulta evidente que el despliegue anual de la contratación pública de pequeñas infraestructuras a escala local genera por sí misma un empleo directo para el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas locales relacionadas con la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis que ha generado la mayor bolsa de empleo en nuestro país, empresas que ante la ausencia de estos Planes se verán obligadas a cerrar en cascada.

Igualmente, a nadie se le escapa la **destrucción de empleo directo en el ámbito de los servicios municipales**, que este drástico recorte va a provocar, ya que muchos proyectos municipales van orientados al sostenimiento de estos servicios, sobre todo, los relacionados con Servicios Sociales (Centros de Día, Residencias de Ancianos, guarderías municipales, etc) y servicios generales a la población en materia cultural, deportiva, atención a la mujer, etc. Si a ellos unimos además, la práctica eliminación de las ayudas que los municipios venían recibiendo de las Comunidades Autónomas para el mantenimiento de estos servicios, muchos de ellos fuera de su ámbito competencial, resultará inviable a su mantenimiento con carácter inmediato con el consiguiente incremento del desempleo en el medio rural y el aumento de las desigualdades sociales en el mismo.

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012 contemplan en el Programa 942A Cooperación Económica del Estado, partida económica 76/760 denominada "A las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las inversiones de las Entidades Locales por Cooperación Económica del Estado". La citada partida presupuestaria tiene asignada la cantidad de 20,702 millones de euros frente a los 83,642 millones de euros de los presupuestos del año 2011, es decir, un recorte del 75,25 %. La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó para su presentación en la tramitación parlamentaria de la Ley la Enmienda número 4 tendente a reparar dicha minoración mediante la modificación de la dotación inicial para que su importe en el ejercicio 2012 sea igual al que estableció la LPPGGE para 2011. Dicha Enmienda no ha sido aceptada al paso de la Ley por el Congreso de los Diputados, y encontrándose la tramitación en el Senado, todavía no es tarde para que el parlamento rectifique y pueda aprobarse la enmienda que evite el recorte de la partida de Cooperación Económica aludida.

Por todo lo cual el Grupo Socialista y en su nombre el Portavoz del mismo, formula esta Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS

1º.- **INSTAR** al Gobierno de España a incrementar la partida presupuestaria referente a los Planes

Provinciales e Insulares de cooperación en la cantidad precisa para que se mantenga en el mismo importe que en el año 2011 la aportación del Estado a la cooperación económica local, es decir, que dicha aportación de 2012 sea por el importe total de 83,642 millones de euros, cantidad que puede ser perfectamente asumible por el Estado dando de baja la partida 510 "Para atender necesidades que puedan presentarse en los Departamentos Ministeriales" de los Fondos de Contingencia y otros imprevistos de la Dirección General de Presupuestos: Gastos de los Departamentos Ministeriales por el importe que se requiere para los Planes Provinciales.

2º.- **INSTAR** a los Grupos Parlamentarios del Senado a la presentación y aprobación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, en línea con la citada Enmienda propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias.

3º.- **INSTAR** al Gobierno de España a favorecer el mantenimiento de la población de los pequeños municipios asegurando unas infraestructuras y servicios públicos suficientes y de calidad.

4º.- **INSTAR** al Gobierno de España a fomentar la mejora de la actividad económica en los pequeños municipios revisando las políticas sectoriales que les afectan negativamente y manteniendo el esfuerzo inversor y financiero en el medio rural, partiendo de sus profundas desventajas frente a los grandes núcleos poblacionales.

5º.- **DAR TRASLADO** del acuerdo plenario al Gobierno de la Nación, a los Grupos Parlamentarios del Senado y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Tras declararse por unanimidad de la Corporación, la urgencia del asunto, el Pleno por unanimidad aprueba dicha Moción.

MOCIÓN 2ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado jueves 19 de abril de 2012, en la comisión de Economía y Empleo de la FRM y P de Castilla y León, el Consejero de Economía, a pregunta de los Alcaldes presentes en esa comisión, avanzó la intención de la Junta de Castilla y León de suprimir la línea de subvenciones a las Entidades Locales para la contratación de desempleados (ELCO), como consecuencia de los recortes realizada en los Proyectos de Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno Central, presidido por Mariano Rajoy. La trascendencia de estas subvenciones debe llevar a que, aunque el Gobierno Central haya suprimido de sus presupuestos la financiación para esta línea, por parte de la Junta de Castilla y León debe hacerse el esfuerzo económico para que puedan mantenerse estos planes que han contribuido muy eficiente a la lucha contra el desempleo a la vez que suponen una importante colaboración con los Ayuntamientos.

Este hecho, se une a la decisión del Gobierno de la Junta de Castilla y León de anular la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la contratación de trabajadores en el ámbito de Nuevos Yacimientos de Empleo, a través de la Resolución de 9 de febrero de 2012 del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que dejaba sin efecto la Resolución de 30 de agosto de 2011.

En un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, donde aumenta mes tras mes el número de desempleados en nuestra provincia y en nuestra Comunidad Autónoma, provoca que muchos ciudadanos

que residen en el medio rural, hayan tenido como única alternativa laboral la contratación a través de los Ayuntamientos, mediante estas líneas de subvención. Sirva como referente que en el año 2011, a través de la línea de subvención para la contratación de desempleados en el ámbito de colaboración con las Entidades Locales, en la Comunidad de Castilla y León se han formalizado miles de contrataciones por un período mínimo de 6 meses, destinadas al mantenimiento y limpieza municipal, limpieza de montes, guarderías, etc.

Por todo lo cual el Grupo Socialista y en su nombre el Portavoz del mismo, formula esta Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente:

ACUERDO

1º.- Instar a la Junta de Castilla y León a que habilite en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2012, una línea de subvención para la contratación de desempleados en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales (ELCO).

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.

Tras declararse por unanimidad de la Corporación, la urgencia del asunto, el Pleno por unanimidad aprueba dicha Moción.

MOCIÓN 3ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en su sesión del 3 de mayo pasado un nuevo mapa judicial, sometido a unos principios y criterios básicos para la demarcación judicial que se alejan de la realidad rural de nuestro país, al estar sometidos esencialmente a criterios de población, según dicho criterio las circunscripciones judiciales o partidos judiciales tendrán una población superior a los 100.000 habitantes.

De llevarse a efecto la reforma ello supondrá la desaparición de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción existentes en Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda, concentrándose todos los órganos judiciales de la provincia en su capital.

Este planteamiento olvida totalmente la realidad histórica, social y geográfica de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia.

No pueden invocarse principios de eficiencia, mejora de la calidad y ahorro económico para la Administración, cuando no hay dato alguno que avale que la supresión de partidos judiciales conllevará a la consecución de tales objetivos. Lo que si está acreditado es que de llevarse a cabo la amputación de los órganos judiciales existentes en el ámbito rural supondrá un alejamiento incomprensible de la Justicia de los habitantes de muchos de nuestros pueblos, con lo que perderán un servicio más a los que podían acceder con cierta cercanía.

Las propuestas de demarcación es evidente que se han hecho desde una ciudad alejada de la realidad de lo que es el territorio de nuestra provincia y de Castilla y León y que únicamente se tienen en cuenta números, no a las personas y sus circunstancias. La propuesta es totalmente ajena a la situación en que se encuentran los justiciables de nuestra provincia, la edad de los ciudadanos, sus recursos, las distancias con

la capital, las vías de comunicación, los medios de transporte, el estacionamiento en la ciudad, etc. Es evidente que lo que hasta ahora un ciudadano de los partidos judiciales “rurales” podía solucionar en una hora, precisará de varias o de toda la mañana en la ciudad, además de resultarle más costoso.

Los vocales del CGPJ parecen desconocer que muchos vecinos de nuestros pueblos tienen una avanzada edad, viven muy alejados de la capital, no tiene transporte público que les acerque a la ciudad y carecen del privado y, claro está, no tienen coche oficial.

La propuesta del Consejo General del Poder Judicial será sometida a informe de los Tribunales Superiores de Justicia y posteriormente llevada al Ministerio de Justicia que será, en último término el responsable, de que la propuesta del citado CGPJ inspire un cambio legal que haga desaparecer las tres sedes Judiciales ubicadas en las cabeceras de los Partidos Judiciales, a excepción del de Segovia capital que acogerá todo el territorio provincial.

Por todo lo cual el Grupo Socialista y en su nombre el Portavoz del mismo, formula esta Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente:

ACUERDO

1º.- Instar al Ministerio de Justicia del Gobierno de España a no respaldar la modificación de las demarcaciones judiciales existentes en la provincia de Segovia por lo que deberá garantizarse la existencia de los cuatro partidos judiciales existentes en la actualidad (Segovia, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda).

2º.- Que se de traslado del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, al Ministerio de Justicia, a la Junta de Castilla y León y a los Portavoces Grupos Políticos en las Cortes de Castilla y León.

Tras declararse por unanimidad de la Corporación, la urgencia del asunto, el Pleno por unanimidad aprueba dicha Moción.

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Habiéndose presentado tres preguntas por escrito por el portavoz del Grupo Socialista, se procede por parte de la Alcaldía a la contestación de las mismas.

PREGUNTA PRIMERA: *«Con fecha 21 de julio de 2004 se adjudica la gestión indirecta mediante concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, a la mercantil AQUALIA, S.A.*

En el Capítulo I.- Condiciones Generales y en el pliego de condiciones técnicas que regirá el concurso, se contempla en su artículo 11, epígrafe 1.2 y en el apartado (a) la concesionaria se obliga a: “La búsqueda, localización y reparación a costa del concesionario de escapes, fugas, averías y enganches no autorizados en las redes de abastecimiento de agua potable”.

En el epígrafe 1.3 del mencionado artículo, se contempla que en el servicio de alcantarillado la concesionaria se obliga a “La búsqueda, localización y reparación a costa del concesionario de averías, escapes, fugas y enganches no autorizados en la red de saneamiento”.

En el artículo 11 (11.1) del pliego de condiciones técnicas se contempla que el período de facturación, será coincidente con los semestres naturales.

En el artículo 17.3 se contempla que el concesionario viene obligado a presentar en la fecha que indica dicho artículo, un ESTUDIO DETALLADO Y VALORACIÓN DE LAS REFORMAS que es preciso acometer en las instalaciones del servicio, tanto en las conducciones generales del abastecimiento de agua potable y demás infraestructuras de suministro, para la correcta puesta a punto de las mismas.

Para llevar a cabo lo anterior, se contempla que dicho estudio constituirá un PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS que pueda servir para planificar las inversiones necesarias del servicio con un horizonte mínimo de diez años (2005-2014).

Por todo ello, este Grupo Municipal del PSOE, formula, para su debida contestación en tiempo y forma, las siguientes preguntas:

¿Cuándo, por quién y porqué, se ha modificado el abono de la cuota de servicio semestral por un abono de la misma cada trimestre? Es decir, tres abonos de cuota de servicio, en lugar de dos.

¿La mercantil Aqualia, S.A. ha presentado el Estudio de Detalle y Valoración de las Reformas?

¿Ha presentado el Plan Director de Infraestructuras?».

Por el Sr. Alcalde se contesta que el cambio del cobro semestral a cuatrimestral de la cuota fija del agua, se aprobó por unanimidad en el Pleno celebrado el día 10 de octubre de 2005. En el año 2006 se presentó por Aqualia el Plan Director que proponía obras por importe de 2.000.000 de euros.

En uso de la palabra por el Sr. Piñeiro Robledo se manifiesta que quiere saber en base a que se realizó dicho cambio.

PREGUNTA SEGUNDA: *«Por acuerdo plenario y siendo éste ratificado posteriormente con la firma del convenio correspondiente de fecha 17-04-2008, se adopta el cambio de calificación del Sector 20 (Los Escobares) de una parcela de 560.000 m² cuyo uso pasa a ser de SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO a SUELO URBANIZABLE DELIMITADO para uso Residencial.*

El titular de dicha parcela es Don Leopoldo Moreno de Porrás-Isla, como se contempla en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Segovia, Tomo 3866, libro 85, Folio 31; Finca 5308; INSC. 1ª.

La motivación por la cual registramos las siguientes preguntas y que éstas sean contestadas en tiempo y forma, es la siguiente:

¿Cuáles son los motivos por los que no se está aplicando el coeficiente correspondiente sobre el valor catastral de los terrenos de su nueva calificación?

¿Se ha comunicado al Registro General del Catastro el acuerdo plenario y la posterior firma del convenio que habilita el cobro por parte del Ayuntamiento su actual calificación como suelo urbanizable en vez de aplicar el coeficiente como suelo rústico?».

Por el Sr. Alcalde se responde que de los 600.000 m² del Sector de Los Escobares, 442.000 m² pertenecen a Don Leopoldo Moreno y el resto a personas particulares. También responde que ya se ha mandado al Catastro para que cambien la clasificación del suelo de dicho sector a los efectos del pago de la contribución.

PREGUNTA TERCERA: *«Por acuerdo de la Junta de Gobierno se aprueba legalizar las obras ejecutadas en las viviendas números 7 y 8 de la Calle Obispo Palenzuela con respecto a la obra ejecutada y no ajustada al proyecto original, consistentes en un incremento de 43,42 m² en cada una de las viviendas, en semisótano 35,49 m² y 7,93 m² en bajo cubierta.»*

Si el acuerdo de la Junta de Gobierno concretó la legalización de dicha irregularidad urbanística, consecuentemente pareciera que se haya podido cometer una infracción urbanística que bien pudiera considerarse como ilegal.

Por lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal del PSOE presente la siguiente pregunta para su contestación en tiempo y forma.

¿Va a determinar el Sr. Alcalde en base al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno legalizar dicho mayor volumen emergente en las dos viviendas citadas presuntamente no ajustadas al proyecto original?».

Por el Sr. Alcalde se contesta que la legalización de dichas obras se produjo en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 14 de junio de 2012. Por el Sr. Piñeiro Robledo se dice que habrá un expediente de legalización. Por el Sr. Alcalde se contesta que se legalizó directamente en el citado acuerdo.

A continuación, se producen las siguientes intervenciones, en este apartado del orden del día:

- de Don Javier García Velasco:

a) Pregunta si se ha cobrado por el Ayuntamiento el dinero previsto en el Convenio suscrito con los herederos de D^a Emilia Azpiroz. Por el Sr. Alcalde, se contesta que hasta que no se apruebe la clasificación de los sectores previstos en el Convenio no se cobrará cantidad alguna.

b) Ruega que se adopten las medidas oportunas, dada la cercanía de un Parque Infantil, en las chapas del Consultorio Médico, ya que pueden producir cortes.

c) Pregunta si se ha dictado y publicado algún Bando para recordar a los propietarios su obligación de limpieza de las fincas, para evitar fuegos. Por el Sr. Alcalde se contesta que sí se ha puesto el bando, pero además se está tratando de llamar personalmente a los propietarios.

- de Doña Carmen Meléndez de Pablos:

a) Pregunta si se tiene pensado realizar un estudio detallado del tráfico por el casco urbano, ya que hay algunas calles en la que se repiten los accidentes de tráfico. Por parte del Sr. Alcalde, se contesta que en principio él entiende que está bien la regulación del tráfico actual.

b) Requiere información sobre la Escuela de Música, que se va a abrir en La Lastrilla, ya que en su publicidad aparece el escudo de este Ayuntamiento. Por el Sr. Alcalde se contesta que, en efecto, se va a abrir una Escuela de Música, en los locales del colegio, pero sin que este Ayuntamiento conceda subvención alguna.

a la misma.

- de Don Pedro Luis Piñeiro Robledo:

a) Pregunta por qué están tapados con plásticos los imbornales de la calle Perú. Por el Sr. Alcalde se responde que, dado que en esta zona las aguas fecales y pluviales van juntas, se han colocado estos plásticos, para que cuando caen trombas de agua no salga el mismo por dichos imbornales.

b) Dado que en el capítulo de personal están presupuestados unos 364.000 euros y el coste real van a ser 153.000 euros, pregunta porqué no se contrata una persona en las oficinas para suplir las vacantes producidas por las vacaciones de verano. Por el Sr. Alcalde se contesta que otros años, debido a las bajas maternales, sí se contrató una persona, pero este año no es necesario. Tampoco se ha considerado necesario ya que el Sr. Secretario tampoco ha manifestado la necesidad de contratar una persona.

c) Ruega que, si es posible, y aunque el Ayuntamiento no tenga Policía Local, se estudie la posibilidad de constituir la Junta de Seguridad Local.

d) Ruega al Sr. Alcalde que, para la contratación de personal, tal y como manifestó en el Pleno anterior, se forme una Comisión de los dos Grupos, ya que pese a haberlo así manifestado, se ha procedido a contratación de personal, sin contar con el Grupo Socialista.

Y sin más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por finalizado el acto, siendo las trece treinta y cinco horas, de lo que yo, el Secretario, certifico.

VºBº
EL ALCALDE,